



El mercante Finlandés Alppila a su llegada al puerto de A Coruña. Europa Press

El maíz de Ucrania encuentra su ruta a España pese a la guerra

El buque Alppila atraca en Galicia tras navegar en el Báltico con 18.000 toneladas del cereal

DAVID VIGARIO

El primer gran cargamento de maíz procedente de Ucrania desde que los puertos del Mar Negro quedaron bloqueados por la armada rusa cuando comenzó la guerra —hace 109 días— ha llegado a España. En concreto, atracó el lunes en el puerto de la Coruña a bordo del buque Alppila, donde se han transportado 18.000 toneladas. El envío aliviará la falta de pienso, en general, de los ganaderos españoles, y, en concreto, de los fabricantes de piensos gallegos, que serán

los primeros en recibir esta materia prima. La descarga del cereal se realizó durante el lunes.

El transporte no ha estado exento de dificultades para evitar el bloqueo ruso, por lo que se ha estrenado para la ocasión una nueva ruta marítima abierta por el mar Báltico. Antes, el envío fue transportado —en pequeñas cantidades— en camiones desde las fronteras del oeste de Ucrania con Rumanía y Polonia, con destino al puerto de Swinoujscie, en este segundo país, donde fue embarcado en las bode-

gas del carguero con destino a Galicia. Así, llegó al muelle de San Diego sobre las 06.00 horas (con dos días de retraso según las estimaciones previstas), aunque antes hizo escala en el puerto alemán de Brunsbüttel. Se espera que ésta sea la nueva ruta que los cargamentos ucranianos utilicen para los próximos meses y que se desbloqueen así los aproximadamente 20 millones de toneladas que están retenidas en Ucrania.

El maíz es una de las materias primas que más ha sufrido el blo-

queo de los envíos desde el considerado *granero de Europa* tras estallar la guerra en Ucrania, por lo que el sector ganadero español ha tenido importantes problemas de desabastecimiento y, sobre todo, de encarecimiento de los precios.

El domingo llegó otro cargamento de maíz —con 40.000 toneladas— procedente de Brasil, también al puerto de A Coruña. Esta situación se produce desde que la UE flexibilizó las normas fitosanitarias de importación desde Estados Unidos y América Latina.

Estos cambios en la ruta del mercado agrícola de Ucrania llegan tras la petición de los países mediterráneos de desbloquear la situación del cereal ucraniano, bloqueado por el Mar Negro por la flota rusa. Los ministros de Agricultura mostraron el pasado miércoles en el I Encuentro Ministerial sobre la Crisis Alimentaria su preocupación por un posible desabastecimiento alimentario, sobre todo en el Norte de África.

Incluso, a finales del pasado mes de mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó a Vladimir Putin de bombardear almacenes de cereal. La semana pasada, Rusia dijo que estaba dispuesta a permitir un corredor naval para sacar el cereal, según aseguró su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

El director de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos, Bruno Beade, valora el envío como «una buena noticia», pero advierte que «aunque parezcan muchas toneladas en realidad son pocas teniendo en cuenta la gran demanda» del sector.

El cereal supone una tercera parte de los granos con los que se fabrican los piensos para alimentar a los animales. Galicia importa el 40% a Ucrania y la invasión del país paralizó el comercio. Desde el inicio del conflicto, la tonelada de maíz se ha encarecido ya en más de 100 euros y se paga ahora a un precio cercano a los 400, una cantidad récord. España importa al año aproximadamente un 30% del maíz que necesita de Ucrania. Además, el 60% de las compras españolas de aceite de girasol en el exterior también proceden de Ucrania, como el 17% del trigo y el 31% de las tortas de aceites vegetales, según datos aportados por Asaja.

Esta organización agraria recuerda que España necesita anualmente más de 36 millones de toneladas de cereales para atender a sus necesidades de consumo. Sin embargo, los datos de avance de campaña reflejan que la cosecha de cereales de invierno de este año sufrirá una reducción del 21% respecto a los datos del pasado año.

Ucrania desminará los puertos si Rusia retira sus barcos

Kiev busca un corredor naval que permita la salida del cereal bloqueado

ANDRÉS MOURENZA. Estambul
Ucrania está dispuesta a desminar al menos uno de sus puertos en el mar Negro para establecer un corredor naval que permita sacar su producción agrícola, especialmente el cereal, cuyo bloqueo a causa de la invasión rusa amenaza con crear una crisis alimentaria. Pero lo hará únicamente si Rusia retira sus barcos del corredor designado y se despliega una misión internacional con poder de fuego que vigile que la flota rusa cumpla su parte del trato, explicaron fuentes diplomáticas ucranianas en declaraciones a EL PAÍS.

Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, cebada, maíz y girasol, pero el bloqueo naval impuesto por Rusia a sus puertos —por donde salía el 95% de sus exportaciones— ha hecho casi imposible que Kiev cumpla sus compromisos. Esto ha dejado en una situación muy delicada a los países más dependientes de la producción agrícola ucraniana como, por ejemplo, Libano (importa de

naval a uno de los puertos ucranianos (probablemente Odesa), donde los buques serían protegidos por barcos de un país no beligerante (Turquía se ha ofrecido). Sin embargo, Moscú exige poder inspeccionar los cargueros antes de que accedan a la costa ucraniana para revisar si portan armas, y los ucranios creen que puede utilizarlo para realizar maniobras de sabotaje.

Kiev exige, además, garantías sólidas de que la flota rusa no aprovechará un eventual desminado de sus puertos para lanzar un asalto anfibio. "Ucrania aceptaría desminar sus puertos si Rusia levanta el bloqueo naval y retira su flota del área acordada", afirmó una fuente diplomática ucraniana. Para garantizar que los barcos rusos no regresan a esa zona una vez abierto el corredor naval, Kiev requiere que se despliegue una misión naval con potestad para el uso de la fuerza en caso de que la flota rusa contravenga el pacto. Esta misión podría actuar bajo el paraguas de la ONU o de la OTAN.



Un soldado ucraniano caminaba el 15 de mayo por el puerto de Odesa. / EFE

Ucrania casi el 75% del trigo que consume), Libia (40%), Túnez (25%), Indonesia (28%) y Bangladés (20%).

A finales de abril, el secretario general de la ONU, António Guterres, visitó Ucrania y transmitió al Gobierno de Kiev la necesidad de hallar una solución al bloqueo del cereal ucraniano. Desde entonces, la ONU ha intentado acercar posturas entre Rusia y Ucrania, sin conseguirlo, por lo que requirió la ayuda de Turquía para mediar entre ambos países. La semana pasada, una delegación rusa viajó a Ankara para tratar el tema. Entonces, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, aseguró que su país no pondrá obstáculos al plan propuesto por Turquía para sacar el cereal de Ucrania siempre y cuando Kiev acepte retirar las minas de sus puertos.

En líneas generales, el plan pasa por asegurar un corredor

Las conversaciones entre ambas partes y a través de la mediación turca continúan por canales extraoficiales, sin que de momento hayan dado resultado, pese a que apremian el tiempo y los dirigentes de los países más afectados. El pasado jueves, el presidente senegalés y presidente de turno de la Unión Africana, Macky Sall, pidió que Ucrania proceda cuanto antes a retirar las minas del puerto de Odesa o, de otra forma, África "se hallará en una situación de hambruna que puede desestabilizar al continente".

Una vez alcanzado un acuerdo, el desminado llevaría meses, según varios expertos. No son solamente de las minas colocadas por los ucranios, sino también de las que han colocado los rusos en Crimea. Los ucranios no están seguros de que Moscú vaya a facilitarles planos sobre la disposición de dichas minas.

Los mercados entran en pánico

- Los inversores temen que las subidas de tipos anunciadas frente a la inflación frenen el crecimiento de las economías
- Las bolsas se hundieron más de un 2%, las primas de riesgo periféricas se dispararon y Bitcoin pierde los 23.000 dólares

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Los mercados vivieron ayer un lunes de pánico en el que casi ningún activo resultó inmune a la sacudida: las principales bolsas mundiales se hundieron, los bonos soberanos se dispararon y las criptomonedas sumaron una nueva debacle contagiados por la incertidumbre que genera el dilema entre inflación y crecimiento económico. Los bancos centrales han comenzado a endurecer sus políticas económicas para tratar de contener el aumento de los precios y el principal temor de inversores y analistas es que esas medidas pongan en peligro la recuperación de las economías tras el impacto de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania.

El pasado jueves fue el turno del Banco Central Europeo (BCE), que anunció el fin de las compras netas de deuda y su primera subida de tipos en 11 años, y esta semana todas las miradas están puestas en la Reserva Federal de EEUU (Fed), que podría anunciar un nuevo aumento de las tasas en su reunión de mañana miércoles. El fantasma de la estanflación coge forma y los inversores se decantan por las ventas generalizadas.

Eso explica buena parte de las caídas que se vieron ayer en las grandes bolsas europeas, que terminaron con descensos por encima del 2%. El Ibex 35 se dejó un 2,47% y terminó perdiendo los 8.200 puntos en la jornada (8.183); aun así, no fue el peor

para la banca, ya que a mayor tipo de interés, mayores rentabilidades. Sin embargo, cuando las subidas de tipos de interés pueden provocar un frenazo importante en el crecimiento económico, como es el caso en estos momentos, y eso puede traducirse en un periodo de estanflación en la economía, entonces la situación ya no es tan buena para los bancos», comenta Sergio Ávila, analista de IG Markets. «Un periodo de menor crecimiento o de crisis económica se traduce en menos proyectos de inversión por parte de las empresas y en menos concesión de créditos tanto en hipotecas como al consumo», añade.

SUBIDA DE PRIMAS

Pero las presiones no se concentraron sólo en la renta variable. Los bonos soberanos europeos se tensionaron tras la reunión del BCE y el riesgo de «fragmentación» que podría provocar su nueva hoja de ruta. Como consecuencia de esa presión, la prima de riesgo española se amplió ayer hasta los 135 puntos básicos y la rentabilidad del bono español con vencimiento a diez años se situó en el 2,98%, frente al 1,62% del *bund* alemán que se toma como referencia. Eso supone la mayor diferencia entre ambos desde mayo de 2020, cuando el pasado mes de enero oscilaba en los 70 puntos básicos y hace un año se situaba algo por encima de 60 puntos básicos.

El indicador italiano también subió hasta los 248 enteros; el portugués, hasta 135, y el francés, hasta los 61 tras la primera jornada electoral celebrada el domingo en el país.

«Las futuras subidas de tipos de interés en Europa pueden causar problemas en el pago de la deuda a los países periféricos que tienen grandes porcentajes de deuda frente al PIB, la mala gestión económica generalizada de estos países provoca que cuando se tensionan los tipos de interés tengan que utilizar grandes partidas de los presupuestos anuales para hacer frente a los intereses de la deuda», explica Ávila.

El pánico inversor de ayer alcanzó también a las criptomonedas, que vivieron una jornada especialmente turbulenta. Al temor de los inversores por la situación general de la economía se sumaron los anuncios de Binance y Celsius Network que afectaron directamente a la operativa con monedas virtuales. Ambas fueron la puntilla para un Bitcoin que al cierre de los mercados europeos se hundía más de un 18% y se situaba por debajo de los 23.000 dólares (22.640), arrastrando con ella a Ethereum (-22%), Cardano (-17%), Solana (-21,5%) o Dogecoin (-21%).

El Ibex 35 pierde los 8.200 puntos tras retroceder en la sesión un 2,47%

La prima de riesgo española escala a 135 puntos, casi el doble que en enero

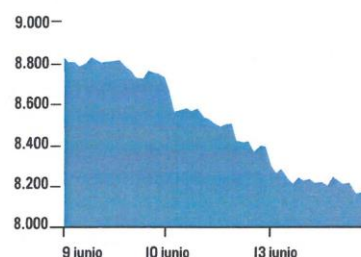
entre sus comparables europeos. En Francia, el Cac 40 perdió un 2,67%; el Dax de Fráncfort, un 2,43% y en Milán, el Ftse Mib, un 2,81%.

En España, casi todos los valores terminaron en negativo, con la excepción de Red Eléctrica (+2,25%) y Naturgy (+1,85%). Especialmente llamativo fue el desplome de la hotelera Meliá (-8,76%), que superó de largo al sector bancario, otro de los más perjudicados por la oleada bajista que se afianza entre los inversores. BBVA se dejó un 3,63% y Banco Santander, el 3,31%. «Un entorno de tipos de interés al alza debería ser considerado como un factor positivo

CAÍDAS DESDE LA REUNIÓN DEL BCE

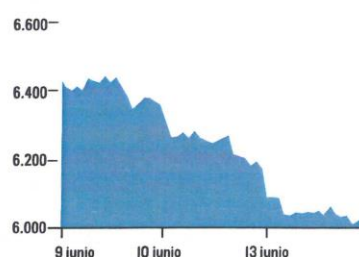
IBEX 35

Cierre: 8.183,30 ▼ -7,05%



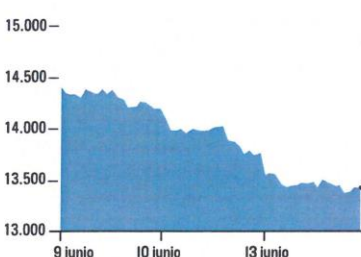
CAC 40

Cierre: 6.022,32 ▼ -7,68%



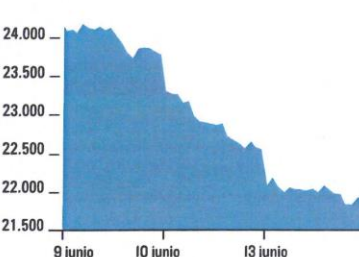
DAX 30

Cierre: 13.427,03 ▼ -7,84%



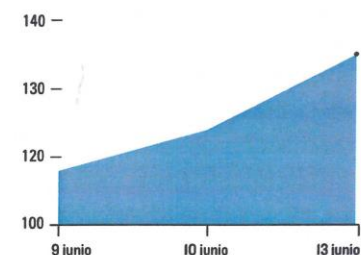
FTSE MIB

Cierre: 21.918,04 ▼ -2,79%



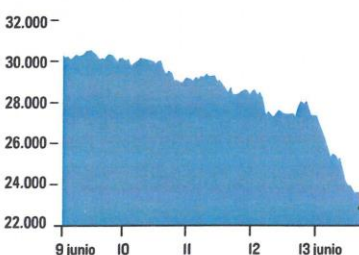
PRIMA DE RIESGO ESPAÑOLA

Cierre: 135 ▼ -9,35%



BITCOIN

Cierre: 23.903,80 ▼ -14,83%



FUENTE: Elaboración propia.

M.V. / EL MUNDO

BINANCE Y CELSIUS ACTIVAN LAS ALARMAS 'CRIPTO'

Las criptomonedas vivieron ayer su particular 'lunes negro' dentro de una jornada de ventas masivas y pérdidas en los mercados en general. Las alarmas se activaron cuando dos firmas reconocidas entre

los inversores, Binance y Celsius Network, realizaron sendos anuncios relacionados con su operativa. La primera de ellas, una plataforma de negociación y proveedor de infraestructura de criptomonedas, suspendió temporalmente las retiradas a través de la red bitcoin como consecuencia del atasco de uno de los lotes procesados, si bien mantuvo abiertas y en

funcionamiento las retiradas a través de otras redes.

La segunda, Celsius Network, anunció la suspensión de todas las retiradas, intercambios y transferencias entre cuentas como consecuencia de las «condiciones extremas» del mercado y «poner a Celsius en una mejor posición para cumplir, con tiempo, sus obligaciones de retiro», informó esta firma en un comunicado.



La mayoría de paneles solares, un componente esencial para la transición energética que busca el Gobierno, son importados desde Asia // ABC

El alza de las materias primas provoca un desvío millonario de fondos UE al exterior

► Las necesidades de importación y la subida de los materiales lastran el impacto positivo sobre la economía que prometía tener el dinero comunitario

DANIEL CABALLERO/GUILLERMO GINES MADRID

La ejecución de los fondos europeos es uno de los deberes que todavía tiene por delante el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde 2021 ya están en marcha en España, pero a un ritmo muy lento y sin que el dinero termine por llegar del todo a las empresas. Y por si los problemas de ejecución fueran pocos, a ello se une que el efecto económico de los fondos Next Generation ya se está escapando de nuestras fronteras por la necesidad de adquirir bienes importados cada vez más caros para acometer los proyectos.

Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, señala el riesgo de que «con el incremento en el precio de las materias primas y en los materiales necesarios para la digitalización y transformación energética, una parte cada vez mayor del gasto se vaya en bienes importados». En este sentido, añade que «habrá empresas que ante los cuellos de botella traten de salir al extranjero para conseguir los materiales que necesitan».

El problema de fondo, más allá de los problemas de ejecución, con las trabas burocráticas que se encuentra el tejido productivo para acceder a las convocatorias, está en que si las empresas han de adquirir los materiales fuera de España para poner en marcha los proyectos, el efecto económico que debería repercutir en nuestro país, hay una parte que se escapa a otros territorios. «Esto

disminuye el impacto que cada euro de ayuda va a tener en términos de euros, de PIB, porque una parte se va fuera. Esto es lo que conocemos como multiplicador fiscal. Cuanto más importe, menor será el multiplicador», advierte Doménech.

Más en términos generales de la economía, pero con afectación también a los fondos europeos, el Banco de España también ha advertido de que el traspaso de rentas nacionales hacia el extranjero, para adquirir, entre otros, bienes energéticos, se está produciendo por valor de hasta 1,5 puntos de PIB. Sin embargo, los expertos consultados sostienen que aún es pronto para saber cuánto del efecto del dinero comunitario se está marchando de España por esa necesidad de importar bienes en el extranjero. Asimismo, Doménech señala que la situación no solo afecta a la compra de bienes sino que también existe la necesidad de hacer contrataciones en el extranjero, lo cual redunda en el mercado laboral nacional.

Así las cosas, el experto de BBVA Research señala que hay componentes que en España escasean y hay que acudir fuera. Por ejemplo, los paneles solares, esenciales en la transición energética y que son importados desde Asia. Pero abarca principalmente también a ciertos materiales que afectan por los cuellos de botella y las necesidades actuales han de adquirirse en el extranjero para poder hacer frente a la demanda.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro

Fernández Alén, destaca la escasez que hay en España de materiales siderúrgicos. «Aquí se transforman, pero hay que importar metales como acero, cobre o aluminio que además están subiendo mucho. El precio del acero, sin ir más lejos, se ha doblado en el último año», destaca. Más allá de estos materiales, la construcción también tiene que importar grandes cantidades de madera e incluso betún.

Fernández Alén advierte además de que el encarecimiento de las materias primas se está eternizando. Y esto condiciona la contratación pública, porque el mecanismo de actualización de precios aprobado por el Gobierno no está funcionando. «No estamos pidiendo ganar dinero, sino que no se pierda, porque si los concursos no salen rentables se quedan sin adjudicar», explica.

El parón de la contratación pública afecta directamente a los fondos europeos. Si bien este 2022 el Gobierno ven-

día que iba a ser el año en que la ejecución de los proyectos cogiera velocidad de crucero, según sus propias palabras, la realidad es que las piedras en el camino no son pocas.

Doménech constata que esta en 2021 «ha sido lenta» y que la expectativa es acelerar este año y el siguiente, pero lanza un aviso: «Es importante invertir bien en buenos proyectos tractores y transformadores». Fuentes empresariales, asimismo, destacan que se necesita dar un papel más relevante a las regiones en la configuración de los proyectos y en su puesta en marcha. Como publicó ABC, las autonomías se han convertido en meras ejecutoras de los fondos ya que la mayoría de proyectos les vienen dados desde el Gobierno central.

¿Cuánto se ha ejecutado hasta la fecha? En términos de llegada de dinero efectivo a las empresas es imposible saberlo, ya que el Ejecutivo no aporta datos en este sentido. Lo que sí ha facilitado el Gobierno es que «ya se han resuelto hasta la fecha más de 840 convocatorias de ayudas gestionadas directamente por la Administración General del Estado, con una inversión superior a los 10.100 millones de euros, destinadas a empresas y entidades públicas de todo el territorio». Pero que estén resueltas no significa que el dinero esté ya en las arcas de las compañías, porque los fondos deben pasar antes por varios estadios.

El Gobierno, además, añade estos datos: «A 31 de mayo de 2022, el porcentaje de ejecución del presupuesto autorizado en la Administración General del Estado se acerca al 42% del crédito total, mientras que el crédito comprometido roza el 30%. Además, las obligaciones reconocidas se sitúan en torno al 11%». Momentos en los que no puede hablarse de ejecución real ya que son estadios administrativos.

LAS CIFRAS DE LOS FONDOS EUROPEOS

11.000

millones de euros es el valor de los proyectos previstos por el Gobierno para el segundo semestre de 2022, más de 35.000 millones en el conjunto del año.

10.100

millones es el valor de las convocatorias resueltas hasta ahora, aunque esto no significa que el dinero ya haya llegado efectivamente a las empresas.

Versiones contradictorias en la estafa de 500.000 euros en jamones

El supuesto cabecilla dice que no sabe nada y el administrador de la empresa le acusa de aprovecharse de su dependencia a las drogas para que firmara los documentos

ÁLVARO MUÑOZ

VALLADOLID. Diez años después del presunto delito de estafa, los acusados José Abellán Navarro y Diego López García, supuesto dueño y testaferro de la empresa Dismarianga (con sede en la avenida de Madrid de Valladolid), respectivamente, se han sentado en el banquillo de la Audiencia de Valladolid por adquirir mercancías, en su mayoría de productos cárnicos y lácteos, sin abonar el importe de los pedidos



Los acusados José Abellán (a la izquierda) y Diego López. RODRIGO JIMÉNEZ

entre 2011 y 2012 a los correspondientes proveedores (timo del nazareno).

Y han declarado este lunes con testimonios contradictorios. Abellán, supuesto propietario, ha ne-

gado que él formara parte de la empresa, mientras que López, que fue el primero en denunciar el presunto delito autoinculpándose, ha reconocido los hechos al ser «toxicómano» en el mo-

mento de las estafas a una docena de empresas. «He sido engañado por mi adicción. José Abellán me daba dinero para que firmara. Solo lo quería para drogarme. Si que sabía que se engañaba a los proveedores, pero no que se les estafaba de esta forma», ha afirmado Diego López, el acusado por el que se aplazó el juicio en mayo al estar en una cárcel de Argentina.

Una declaración en la que ha titulado al propio Abellán como el «cerebro» de la operación. «Se encargaba de que su firma no apareciera en ningún papel. No tengo pruebas, solo tengo mi palabra, pero yo sí sé quién es Abellán. Él nunca deja huellas. Se ha aprovechado de mi enfermedad y soy culpable por tonto», ha añadido el testaferro de la empresa, que ha afirmado no tener ni idea de cómo administrar una empresa. «No sé qué es una mercantil o una sociedad limitada. No es mi oficio, ni tengo las aptitudes. Se han engañado a personas honradas por mi culpa. Soy una víctima», continúa.

La declaración del otro acusado, el supuesto dueño de la empresa a pesar de que no figure en

el organigrama de la misma, ha girado a la negativa de formar parte de Dismarianga. «No sé nada. En esas empresas no aparecen ni mi nombre ni firma», añadió Abellán, que ha reconocido conocer al testaferro tras «alquilarle una finca en Murcia a él y a un compañero que escondían droga en la escayola», ha agregado antes de reprochar al propio Diego que no negara con la cabeza mientras declaraba a las preguntas de su abogado. «No digas que no ahora, no tengo nada que ver. Diego es el más listo de esta Sala», ha añadido el supuesto cabecilla de la estafa, que ya fue condenado por la Audiencia de Teruel por estafa a seis meses de prisión, aunque la pena le fue suspendida en 2011 por cinco años.

Asimismo, Abellán ya ha consignado «alrededor de 20.000 euros» de los 500.000 que supuestamente se hubieran estafado entre 2011 y 2012, misma cantidad que la Fiscalía pide como indemnización para la docena de empresas afectadas. «Si lo llevo a saber, después de lo que se ha escuchado hoy (en relación a la declaración de Diego López), no pago ese dinero», concluyó.

> BURGOS

El jardinero inteligente del campo

La UBU firma un modelo sobre algoritmos de inteligencia artificial que busca obtener resultados capaces de modelizar las necesidades de riego de un número importante de cultivos que se desarrollan en la cuenca mediterránea. **E. Lera**

La tecnología ha entrado en nuestras vidas, y la agricultura no ha sido ajena a esta revolución. En las estampas donde solo se veían sombreros de paja y personas con monos de trabajo, aparecen nuevas herramientas que facilitan mucho el día a día. En este sentido, el grupo de investigación en Inteligencia Computacional Aplicada de la Universidad de Burgos (UBU), junto con el grupo de Investigación en Compostaje, está trabajando en un modelo sobre algoritmos de inteligencia artificial que busca obtener resultados capaces de modelizar las necesidades de riego de un número importante de cultivos que se desarrollan en la cuenca mediterránea.

Y es que, según comenta el investigador Carlos Cambra, ante el cambio climático y el aumento de las limitaciones de los recursos hídricos, es necesario unir esfuerzos en minimizar los desperdicios hídricos y huella de carbono generada en los cultivos de zonas áridas y semiáridas como es el sur de Europa. «El incremento de la sostenibilidad en la actividad agrícola se ha visto beneficiado por el nuevo paradigma de agricultura de precisión».

Por esta razón, en esta aplicación incluyen tecnologías disruptivas como el internet de las cosas y la inteligencia artificial. ¿De qué manera lo integran para ofrecer soluciones a los retos? Explica que, con los datos recogidos mediante la sensorización en campo, así como otras fuentes, como drones equipados con distintas cámaras, se entrenan los modelos neuronales y previa investigación de resultados se selecciona el más óptimo, con la meta de realizar una predicción de las necesidades hídricas futuras del cultivo.

En concreto, Cambra precisa que el elemento innovador en el aspecto tecnológico es la generación de un modelo predictivo que, basándose en la analítica de datos, pueda predecir las necesidades hídricas de un cierto cultivo, permitiendo de esa manera optimizar el uso de los recursos disponibles. «No estamos hablando de agua, sino también de otros recursos como, por ejemplo, los energéticos». Para ello, se han aplicado de manera pionera modelos neuronales de series temporales, que emplean aprendizaje supervisado.

Para realizar una predicción de riego más ajustada, tal y como señala, es necesario poder procesar millones de datos y a través de estos modelos consiguen minimizar el error en la predicción. Además, el investigador de la UBU asegura que, con el paso del tiempo, estos algoritmos son capaces de mejorar,



Sensores colocados en un viñedo. EL MUNDO

ya que se pueden adaptar para ser más eficientes en la predicción, teniendo en cuenta los nuevos datos capturados. En este caso, añade, la innovación viene también justificada por la estimación del nivel de humedad en el suelo a distintas profundidades, que es el objetivo de la actividad de riego.

La tecnología que se encuentra detrás de este proyecto son las redes neuronales artificiales, habiéndose aplicado de manera pionera modelos neuronales para predicción de series temporales, con aprendizaje supervisado. En especial, informa que han optado por el modelo Non-linear Autoregressive with Exogenous Input (NARX), que es el que mejores resultados ha obtenido en la investigación realizada, atendiendo al error cometido en la predicción.

En esta línea de trabajo también se aplican otras técnicas avanzadas de analítica de datos orientadas a corregir deficiencias en los propios datos, comunes en datos captados directamente en entornos agresivos como pueden ser las parcelas agrícolas. En ese sentido,

están investigando el uso de imputación de valores ausentes para este mismo problema, combinado con las tecnologías ya mencionadas. De igual forma trabajan el preprocesado de los datos para dejar estos con las características adecuadas para la posterior aplicación de los modelos de *machine learning* sobre los mismos.

Respecto a las ventajas, Carlos Cambra expone que ofrece la posibilidad de ampliar los conocimientos sobre la optimización del uso del agua, a través de la evaluación del efecto de distintas estrategias de riego. De igual forma, permitirá disponer de datos cuantitativos sobre el funcionamiento y comportamiento de ciertos cultivos dependiendo de problemáticas ocurridas, así como contar con herramientas útiles y eficaces para la programación y optimización del riego en los distintos cultivos y variedades.

Es verdad, comenta, que a nivel científico existen publicaciones y trabajos aplicando estas tecnologías de computación en eficiencia de los recursos hídricos y también energéticos enlazados a su distri-

bución en redes presurizadas para agricultura, si bien este proyecto, en su opinión, responde a las necesidades reales que pueden surgir en el ciclo productivo de una cosecha. De manera específica, celebra que para esta problemática es la primera vez que se aplican los modelos con los que están trabajando. Además, de forma complementaria están explorando la aplicación de otros modelos de inteligencia artificial para distintas problemáticas agrícolas que también pueden verse beneficiadas.

La idea es probarlo en una mini parcela de viñedo que se encuentra localizada dentro del campus de Milanera de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. Un primer paso, según adelanta, que quieren que sirva como banco de pruebas reales para acercar la tecnología a los agricultores y viticultores. De esta forma, afirma, podrán conocer y experimentar su manejo e integración en sus propias explotaciones.

Los siguientes pasos se escribirán trabajando en modelos predictivos que puedan dar apoyo en la

toma de decisiones a diferentes problemáticas, no solo a nivel de necesidades de riego de la planta, sino también para predecir plagas, enfermedades, fertilización, etcétera. Están también trabajando en el procesamiento de imágenes (tanto satelitales como obtenidas con drones) con avanzados modelos neuronales, dentro de lo que se denomina como *deep learning* y que tanto puede aportar en este sector.

«Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva PAC nos impulsan a desarrollar herramientas digitales e inteligentes para poder alcanzar una alta sostenibilidad, asegurando la rentabilidad, en la producción de alimentos. Desde la Universidad de Burgos ofrecemos la aplicación de técnicas disruptivas ya consolidadas para dar apoyo en la toma de decisiones para la gestión de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, sacando el máximo partido a la digitalización y la innovación tecnológica de este amplio sector productivo tan relevante para nuestra comunidad autónoma».



Mañueco, ayer en Villalazán junto a representantes de la administración local y provincial de la Comunidad // ICAL

Un fondo local para «mejorar las condiciones de vida» en los pueblos

► Mañueco anuncia un impulso de 108 millones del plan de crecimiento innovador para pymes

ALBERTO FERRERAS/M. G. ZAMORA/VALLADOLID

Los municipios de menos de 20.000 habitantes, 2.234 de los 2.248 existentes en Castilla y León, contarán con una nueva línea de financiación a través de un Fondo de Cohesión Local al que la Junta inyectará 20 millones de euros y que con las aportaciones que hagan ayuntamientos y diputaciones provinciales, superará los 30 millones. El dato

lo ofreció el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación del nuevo plan ante un centenar de alcaldes, concejales y presidentes de Corporaciones provinciales en el municipio zamorano de Villalazán, paradigma del medio rural autonómico, con menos de 300 habitantes, pero también de la esperanza de futuro al contar con uno de los alcaldes más jóvenes de España, Juan del Canto, de 22 años.

Mañueco explicó que el nuevo fondo extraordinario busca «impulsar el empleo, consolidar los servicios públicos en el medio rural y mejorar las condiciones de vida» en los municipios de menos de 20.000 habitantes. En ellos, según recordó, viven 1,1 mi-

llones de personas, casi la mitad de la población de la Comunidad. Una de las características del nuevo fondo será el criterio corrector para que el dinero «llegue donde más dificultades hay y donde más se necesita» y sirva además para luchar contra la despoblación. Para ello se priorizará en el reparto a las provincias con más tasa de paro y mayor despoblación, ya que el primero de esos criterios tendrá un peso del 30 % en la distribución de los fondos y el segundo del 10 %.

El fondo estará cofinanciado, de manera que en el caso de municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, la Junta aportará el 75 % y los ayuntamientos el 25 % restante y en los de menos de mil habitantes, la administración autonó-

mica asumirá el 50%, los consistorios el 25% y las diputaciones provinciales el otro 25 % del coste de los proyectos.

Esta partida se incluye en los 500 millones de euros que la Junta pretende destinar a las corporaciones locales a lo largo de la legislatura a través de diferentes «instrumentos de financiación», lo que Mañueco puso de «ejemplo del compromiso con los pueblos y con el medio rural». Por su parte, el alcalde de Villalazán criticó a quienes dicen defender el medio rural desde la lejanía y sin conocer la realidad de los pueblos, lo que contrapuso con el conocimiento que el Gobierno regional tiene del territorio.

Esos 20 millones de euros que aportará la Junta fueron bien recibidos también por representantes de las diputaciones presentes en el acto, como el presidente de la institución provincial de Valladolid, Conrado Íscar, quien apuntó que el Fondo de Cohesión «viene para quedarse»; su homóloga palentina, Ángeles Armisen, quien destacó que este instrumento «va a permitir seguir apostando por la comunidad más municipalista de España»; o el abulense, Carlos García, quien valoró una «forma de hacer política» con la implicación con las zonas rurales que entiende dará un impulso al municipalismo.

Tras la presentación del fondo como una de armas con la que lidiar en la batalla contra la despoblación, Mañueco se desplazó al Monasterio de Santa María de Valbuena (Valladolid) para mostrar el compromiso del Ejecutivo con la otra «gran prioridad» de la Junta en estos tiempos «difíciles», la «recuperación económica y social, en la cual reconoció el papel «determinante» de los empresarios. Así lo aseguró Congreso de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) en el que anunció un «impulso» al plan de crecimiento innovador para pymes con un a nueva aportación de 108 millones, que elevará a 260 el total destinado a tal fin esta legislatura. «Un claro ejemplo de éxito de colaboración público-privada» que ha permitido ya formalizar 60 proyectos, una inversión generada de 400 millones, la creación de 2.500 empleos y el mantenimiento de otros 10.000, expuso.

«SOMOS LA SAVIA DEL TEJIDO INDUSTRIAL»

Palomo toma el mando de EFCL con el reto ganar competitividad

M. G. VALLADOLID

«Queremos que las empresas familiares sean más competitivas en un mundo de cambio acelerado como el actual, en temas capitales como la digitalización o la sostenibilidad». Es el reto que el segoviano Pedro Palomo se marcó ayer tomar posesión como nuevo presidente de Empresa Familiar Castilla y León (EFCL) que inicia, dijo, una «etapa continuista» para proyectos que ya están en marcha desde hace varios años tras haber formado

parte de la junta directiva de la anterior mandataria, Rocío Hervella, in forma Ical.

Y en ese escenario de pujanza por la «competitividad», las empresas familiares «ahora tienen por delante «muchos retos que afrontar», por lo que llamó la atención sobre la necesidad de que no les pongan «piedras en el camino o muchas empresas lo pasarán mal». «Somos la savia del tejido industrial de nuestra Comunidad», advirtió, informa Ep.



Palomo y Hervella, ayer en el Congreso de EFCL // ICAL

La Junta impulsa el mundo rural con 20 millones de euros del Fondo de Cohesión

● Mañueco resalta que el objetivo del Gobierno regional es «favorecer el empleo, consolidar los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida» en un Plan del que se beneficiarán más de un millón de habitantes

JOSÉ JAVIER ÁLAMO VALLADOLID

La Junta de Castilla y León destinará 20 millones de euros al Fondo de Cohesión Territorial del que se beneficiarán los municipios de la Comunidad de hasta 20.000 habitantes. Así lo anunció el presidente del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto celebrado ayer en Villalazán (Zamora). Mañueco indicó que este dinero está destinado a «favorecer el empleo, consolidar los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos».

El presidente de la Junta señaló en Villalazán, en un acto que contó con la asistencia de varios alcaldes y presidentes de Diputación, que en su discurso de Investidura se comprometió a apoyar a los municipios de la Comunidad. «La extensión de Castilla y León es muy grande y por eso hay dificultades y problemas. Tenemos que trabajar todos juntos para emprender una nueva visión del mundo rural. Hoy es un día importante para el municipalismo», señaló.

En su discurso, Mañueco añadió que más de un millón de habitantes de Castilla y León, «casi el 50% de la población», se van a beneficiar de este Fondo de Cohesión Territorial. De los 20 millones de euros anunciados por el presidente de la Junta, el 30% irá destinado a los municipios con mayor tasa de paro y el 10% a territorios con mayor tasa de despoblación.

Mañueco dijo que este Fondo de Cohesión será cofinanciado por las corporaciones locales. Para los municipios entre 1.000 y 20.000 habitantes la Junta abonará el 75% y los Ayuntamientos el 25% restante, mientras que en el reparto de localidades con menos de 1.000 habitantes también intervienen las Diputaciones con un 25%, idéntico porcentaje que los Ayuntamientos, y la Junta desembolsará un 50%.

El presidente de la Junta afirmó que estas ayudas son un «instrumento para fijar población» y «preservar la riqueza cultural y patri-



El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto a alcaldes y presidentes de Diputación, ayer, en la presentación del Fondo de Cohesión. ICAI

FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL

	Picas	Fondo cohesión tasa paro	Cohesión despoblación > media cjl	TOTAL	Total inversiones movilizadas
Ávila	1.062.922	924.142	287.832	2.274.897	3.853.300
Burgos	1.455.902	598.434	36.689	2.091.026	3.691.953
León	2.417.964	770.018	0	3.187.982	4.960.947
Palencia	936.054	612.281	268.764	1.817.101	3.010.168
Salamanca	1.864.181	733.293	0	2.597.474	4.293.366
Segovia	1.033.326	538.229	169.702	1.741.259	2.868.959
Soria	619.677	485.851	798.491	1.904.020	3.287.539
Valladolid	1.513.052	567.128	0	2.080.180	3.209.128
Zamora	1.096.917	770.620	438.518	2.306.056	4.070.345
Castilla y León	12.000.000	6.000.000	2.000.000	20.000.000	33.245.709

FUENTE: Junta de Castilla y León

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

monial». «Tenemos que recuperar la normalidad en los servicios públicos. Mi Gobierno es consciente de ello y actúa en consecuencia con más inversiones en el mundo rural», aseguró.

Mañueco indicó también que la Junta destinará 500 millones de euros a las corporaciones locales durante esta legislatura en un «ejemplo de compromiso» con el medio rural, «con una vocación municipalista». «Los municipios son un ins-

trumento imprescindible para asentar la población. Sus habitantes siguen manteniendo la vida de nuestra tierra y son capaces de preservar nuestra enorme riqueza patrimonial», añadió.

«Tenemos que recuperar tras la pandemia la normalidad en todos los servicios públicos que se prestan a los vecinos del medio rural. Queremos más crecimiento económico y más inversiones en el medio rural, porque eso va a generar

que haya más empleo. Buscamos también la cohesión y la igualdad de oportunidades, con más y mejores servicios públicos municipales», señaló el presidente. Con el fin de que el dinero llegue cuanto antes a los municipios habrá un pago anticipado solo con acreditar la contratación y ejecución directa por parte de cada Ayuntamiento.

Por provincias, León recibirá de la Junta el mayor montante en el reparto de los 20 millones de euros con 3.187.982 de euros, lo que supone un 15,94% del total. Le siguen Salamanca (2.597.474€, 12,99%), Zamora (2.306.056€, 11,53%), Ávila (2.274.897€, 11,37%), Burgos (2.091.026€, 10,46%), Valladolid (2.080.180€, 10,40%), Soria (1.904.020€, 9,52%), Palencia (1.817.474€, 9,09%) y Segovia (1.741.259€, 8,71%).

El 30% de los 20 millones del Fondo de Cohesión tendrá en cuenta la tasa de paro provincial y en ese sentido la provincia que se llevará más dinero es Ávila con 924.142 euros, seguida de Salamanca (733.293€), Zamora (770.620€) y León (770.018€). Las provincias que tendrán menos di-

nero en este apartado son Segovia (538.229€) y Soria (485.851€). Por lo que a la despoblación se refiere, con una asignación del 10%, Soria es la provincia a la que le corresponderá una mayor cuantía (798.491€), seguida de Zamora (438.518€), Ávila (287.832€) y Palencia (268.764€). León, Salamanca y Valladolid no recibirán cantidad alguna por este concepto.

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisen, señaló que el nuevo Fondo de Cohesión Territorial «va a permitir seguir apostando por la Comunidad más municipalista de España», con 2.248 municipios. «Esa cohesión no solo es territorial, sino que vamos a trabajar por la cohesión social que garantice el futuro de las personas de Castilla y León», aseguró.

Armisen hizo estas declaraciones durante el acto de presentación de este Fondo de Cohesión Territorial, en el que participaron también el alcalde, Juan del Canto, el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, el presidente de la Diputación de Valladolid,

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El alcalde de Villalazán, Juan del Canto Sevillano, el más joven de España, presentó el acto y no desaprovechó la oportunidad de enumerar las virtudes del municipio, además de agradecer la presencia del número uno del Ejecutivo autonómico. «Estamos cansados de palabras que dicen defender el mundo rural desde la lejanía y la Junta de Castilla y León conoce nuestra realidad», aseguró. «Estoy seguro de que el horizonte que marcamos hoy (por ayer) aquí nos permitirá seguir avanzando».

SEGUIR AVANZANDO

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, auguró «mucho futuro» al alcalde de Villalazán. «Es un municipio acogedor y hospitalario, que no es ajeno a los problemas de despoblación pero que también es ejemplo de resiliencia. Las administraciones debemos ir de la mano en temas vitales», señaló.

Igualmente, agradeció al presidente de la Junta que haya escogido la provincia de Zamora para presentar el nuevo Fondo de Cohesión Territorial. «No podemos perder más oportunidades para cambiar la tendencia negativa de la provincia. Apuesto firmemente por nuestras potencialidades y lo que puede llegar a lograr la colaboración entre las instituciones y la iniciativa privada», subrayó. «Hoy (por ayer), Villalazán se convierte en una magnífica lanzadera desde la que apostar por el futuro de Castilla y León».

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, afirmó que los 20 millones del Fondo de Cohesión Territorial van a generar 30 millones con la colaboración de ayuntamientos y diputaciones.

Durante la presentación de este fondo por el presidente de la Junta, Conrado Íscar puso en valor este compromiso para corregir desigualdades tanto en la provincia de Valladolid como en Castilla y León. «Viene para quedarse», destacó el titular de Diputación vallisoletana, para añadir que cada año se irá adaptando a las circunstancias y para reafirmar el compromiso del presidente de la Junta con la cohesión de Castilla y León en colaboración con las entidades locales. «Es un día importante para Valladolid y para Castilla y León», concluyó Íscar.

Maroto y Mañueco resaltan que el acuerdo de Siro es un «compromiso de futuro»

La ministra señala que «este éxito colectivo pone de manifiesto que la política sirve» y el presidente de la Junta reitera que era «necesario»

R. G. VALLADOLID

Tras varios meses de zozobra y de miedo ante la posibilidad de perder sus empleos, los trabajadores de Siro en Castilla y León vieron como los representantes sindicales estampaban su firma en el plan de competitividad que garantiza la supervivencia de la empresa. Un documento que goza de una importancia mayúscula y sobre el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, coincidieron que representa un «compromiso de futuro» con la compañía y con la Comunidad.

En este sentido, el líder del ejecutivo autonómico aseguró que «La Junta de Castilla y León está al lado de todas las empresas, de todos los trabajadores y de Siro». Igualmente, señaló que desde su gobierno «hemos insistido en la necesidad de un acuerdo». Según dijo, «sin él era imposible el futuro de la empresa». Por ello, remarcó que el ejecutivo que encabeza ha estado durante los últimos meses «pendiente» de la situación, si bien reconoció que «en los últimos días, los acontecimientos nos han superado a todos».

En cualquier caso, reiteró el compromiso del ejecutivo autonómico. «La Junta de Castilla y León estuvo, está y estará en el futuro», señaló, al tiempo que reconoció que «todavía tenemos que trabajar» en referencia a los próximos dos años, plazo para lograr la competitividad de la fábrica de galletas de la compañía.

«Estamos aquí para ayudarlos, para que haya futuro en Castilla y León», indicó el presidente, quien además dijo que ese futuro es posible «gracias a este acuerdo».

Asimismo, recordó que en una de las conversaciones mantenidas con uno de los compradores habituales de los productos de Siro, este le decía que lo más importante de esta empresa son sus trabajadores, con lo que quiso ensalzar su figura y su respaldo al plan de competitividad.

Por su parte, la ministra destacó la importancia del acuerdo. «Hemos conseguido un proyecto de futuro para Siro, pero este Gobierno tiene un compromiso de seguir trabajando para su futuro y vamos a reafirmar lo que en el pasado fue una historia de éxito», aseguró muy emocionada Maroto tras el acto de firma del acuerdo

entre los comités de empresa y sindicatos de las fábricas del grupo Cerealto Siro en Castilla y León y los representantes de los inversores, tras la ratificación por

«La Junta está al lado de todas las empresas, todos los trabajadores y también de Siro»

«Este acuerdo es un ejemplo de apuesta por las oportunidades de la España rural»

parte de los trabajadores este fin de semana de las condiciones del plan de competitividad para la empresa.

La titular de Industria recalcó que la «política industrial en Es-

paña es una política de Estado». «Estamos defendiendo esa España rural, poniendo la política en mayúsculas tras haber conseguido salvar 1.700 empleos en el mundo rural, solo con eso merece estar solo un día en este Ministerio», reiteró Maroto.

«Este éxito colectivo pone de manifiesto que la política sirve y me siento orgullosa por poner la política al servicio de las personas. Además, este acuerdo es un buen ejemplo de apuesta por las oportunidades y el futuro de la España rural, en este caso de Castilla y León, una de las prioridades que tiene el Gobierno de España», aseguró tras la rúbrica del acuerdo.

De esta forma, el plan industrial para Siro prevé una inversión de más de 100 millones de euros para las plantas del grupo de las fábricas de Toro, Venta de Baños y Aguilar de Campoo y del centro especial de empleo y El Espinar en los próximos cinco años, mientras que el plan social inclu-



ye el mantenimiento del 100% de los empleos y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

Maroto presidió ayer por la tarde la firma de este acuerdo en el que también estuvieron presentes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la delegada del

Un pacto que garantiza el empleo y supeditado a la paz social en 4 años

R. G. VALLADOLID

Desde este último fin de semana la situación de los trabajadores de Siro dio un vuelco, ya que ahora veían con optimismo el futuro de una empresa de la que dependen unas 1.700 familias de Castilla y León. Sin embargo, no ha sido hasta este lunes, con la firma del acuerdo de competitividad de la empresa, cuando se han podido conocer los pormenores del documento, que entre sus principales pilares incluye la garantía de los empleos, el mantenimiento de la paz social y el compromiso del Gobierno analizar las inversiones a realizar por el nuevo inversor.

Sin embargo, el acuerdo va más allá, puesto que dedica un epígrafe a la planta Venta de Baños 1, la que atraviesa una peor situación y la primera que se planteó cerrar. Al respecto, se indica que «los nuevos accionistas se comprometen a no cerrar la actividad durante un periodo de dos años». Un intervalo que servirá para que los nuevos propietarios de la empresa, en colaboración con el Estado, «busquen nuevos inversores

que den un futuro a dicho activo en condiciones aceptables para los propietarios».

Asimismo, en el caso de que el cierre de la factoría fuera la única solución viable, «los inversores se comprometen a mejorar las condiciones de salida ofrecidas actualmente calculadas con 36 días por año de antigüedad con 20 meses de tope». En este contexto, el acuerdo ofrece también diferentes fórmulas de salidas incentivadas, especialmente para aquellos de mayor antigüedad.

Ya en otro punto del acuerdo se hace referencia a la compensación de los trabajadores por la contención salarial a la que deberán hacer frente durante los próximos cuatro años. En este sentido, «los inversores se comprometen al final del año 4, compensar con un 8% del salario a todas las plantas que durante dicho periodo hayan conservado los niveles de producción y rentabilidad con Mercadona obtenidos en el año 2021». Según se indica, esto supone «la recuperación de toda la deducción salarial acordada para el

periodo del plan de competitividad, y un exceso adicional de entre un 1 y un 2% dependiendo de los casos».

Como tercer pilar del plan de competitividad se incluye el mantenimiento de la paz social, un requisito que se marca específicamente para los trabajadores de Siro. Deberán hacerlo «durante el periodo de cuatro años que se mantenga el citado acuerdo para mantener las mejoras propuestas en esta carta al plan de competitividad actual».

Finalmente, y como cuarto elemento destacable, el texto firmado ayer por los representantes sindicales de la galletera recoge que «el Gobierno se compromete a analizar las inversiones a realizar por el inversor, e informar de las subvenciones compatibles de acuerdo a la legislación europea y vigente». Con este último se complementan las condiciones asumidas por todas las partes implicadas para que «el corazón de Siro siga latiendo», tal y como indicó la ministra de Industria, Reyes Maroto.



Reyes Maroto y Alfonso Fernández Mañueco, en la foto de familia tras la firma del acuerdo con el nuevo inversor. ICAL

Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, así como los alcaldes de Aguilar de Campoo, María José Ortega; de Toro, Tomás del Bien; El Espinar, Javier Figueredo y de la localidad de Venta de Baños, José María López y también el presidente y fundador de Cerealto Siro, Juan Manuel González Serna, informa Europa Press.

Durante este acto, que representa la supervivencia de Siro, también intervinieron algunos de los representantes sindicales que han participado más activamente en la búsqueda de un acuerdo. Así, el presidente del comité de empresa de Aguilar de Campoo aseguró que «no es momento de reproches», sino que «es momento de agradecer». Y dentro de estos agradecimientos incluyó a toda la plantilla de la galletera, a quien consideró «grandes compañeros» y al comité de la planta paletica, por haber sido «los mejores compañeros de viaje».

Tras él intervino su homólogo en Toro, que reconoció que «en estos últimos meses se vivieron momentos duros en los que veíamos peligrar nuestros empleos». Por ello, y dirigiéndose a todas las autoridades presentes en el acto, quiso trasladarles su gratitud y la de sus compañeros. «Os agradecemos toda la ayuda que hemos recibido», aseguró.

Por otra parte, indicó también que la plantilla de la galletera asume «estos compromisos como parte de un futuro industrial para nuestra región». Asimismo, mostró su confianza «en que se haga todo lo posible para que la planta de galletas tenga continuidad».

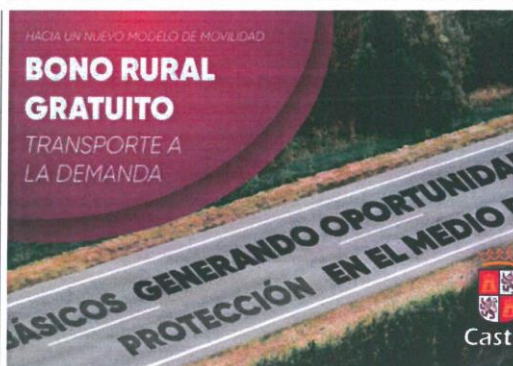
EL PRESIDENTE DE SIRO SE DESPIDE CON «SATISFACCIÓN, ORGULLO Y GRATITUD»

El plan de competitividad de Siro marca un antes y un después en la historia de la compañía, que ya cuenta con más de 30 años a sus espaldas. Durante este tiempo, y desde que nació con una plantilla de menos de un centenar de trabajadores, fue Juan Manuel González Serna quien estuvo al timón. Solo la difícil situación económica de los últimos años le ha obligado a dejar su empresa en manos de los nuevos inversores y por eso ayer, tras la firma del acuerdo, quiso dirigirse a sus empleados para despedirse y ceder el bastón de mando en esta nueva etapa.

Para ello, intervino después de los representantes sindicales, y visiblemente emocionado resaltó su «enorme satisfacción» al saber que los trabajadores de Siro tienen «futuro». En cuanto a los miembros de los comités de empresa, ensalzó su labor representando «a miles de personas», al tiempo que les agradeció profundamente que hayan llevado a cabo «un ejercicio de responsabilidad» al suscribir el acuerdo.

«Yo soy el pasado», dijo, «ellos son el presente y el futuro», en referencia los nuevos inversores de la empresa y cuyos representantes también estuvieron presentes en este acto.

«Qué emoción me produce y qué gratitud tengo», volvió a remarcar González Serna, quien reconoció también que llegar a una situación como la de hoy «era muy difícil», algo por lo que mostró una vez más su «orgullo». «Gracias por hacerlo posible otros 30 años y otros 300», concluyó.



García-Gallardo lidera un tijeretazo a sindicatos y a CEOE en la recta final de las andaluzas

Veganzones ejecutará el recorte de 20,3 millones y asegura que destinará ese dinero a contratar orientadores del EcyL

SUSANA
ESCRIBANO



VALLADOLID. Mientras Alfonso Fernández Mañueco asistía en Madrid a la firma del acuerdo que encarrila la salida de la crisis de Siro, el vicepresidente Juan García-Gallardo y el consejero Mariano Veganzones anunciaban en Valladolid el recorte de las subvenciones autonómicas que reciben la patronal CEOE Castilla y León y los sindicatos UGT y CC OO. Una medida que los dirigentes de Vox activan, además, en la recta final de la campaña de las elecciones andaluzas.

El recorte lo promueve la Junta, es oficial, como dejaron claro los dos dirigentes de Vox, pero lo impulsa esta formación, algo evidente en la puesta en escena de la presentación de la iniciativa. García-Gallardo y Veganzones cuantificaron el tijeretazo al dinero que reciben los agentes sociales en convocatorias de ayudas, en 20,36 millones de euros, que los afectados notarán a lo largo de este ejercicio y los próximos. La medida puede tener un efecto explosivo sobre el Diálogo

Social que mantiene la Junta con los agentes sociales, instrumento de negociación de políticas laborales y sociales que Castilla y León cimentó hace 20 años y que ha exportado a otras comunidades y países.

La «paz social», remarcó el vicepresidente al explicar las diez medidas que aplicará la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, no puede ser «a costa del apesobramiento» de los actores implicados. Se refería a la patronal y a los sindicatos de clase. So-

bre todo a estos últimos. «Defendemos el papel que juegan los sindicatos en la sociedad», puntualizó el político ultraconservador, «pero no creemos que ese papel tenga que estar ultrasubvencionado», acotó.

Diez subvenciones

Veganzones meterá la tijera en diez líneas de subvenciones para formación de trabajadores y desempleados, orientación laboral, prevención de riesgos laborales, impulso a la negociación colectiva y promoción de la actividad empresarial y sindical. Algunas se suprimirán completamente. Eso ocurrirá, por ejemplo, con los 3,6 millones de subvenciones directas para el diálogo social y la prevención de riesgos laborales y con las cuatro cátedras sobre la materia que acogen las universidades de Salamanca, Burgos y Valladolid, financiadas con 160.000 euros. «Los 4.000.000 de euros que hasta ahora han recibido CC OO, UGT y CEOE en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León quedarán rebajados a la mitad en el próximo presupuesto», recoge la documentación, con el membrete de la Junta, facilitada tras la rueda de prensa.

El recorte afecta de refilón a otras organizaciones sindicales con menos representación, que verán como una partida de 225.000 euros se reduce a la mitad.

«No se trata de recortar por recortar», defendió el vicepresidente. Los dos dirigentes aseguraron



Veganzones y Gallardo se dirigen ayer a la rueda de prensa para anunciar los recortes. CARLOS ESPESO

El anuncio de Vox, con Mañueco en Madrid y la víspera de un mitin del vicepresidente en Almería

Gallardo convocó a la prensa para informar del recorte de subvenciones mientras Mañueco asistía a la firma del acuerdo de Siro

S. E.

VALLADOLID. «Esto es solo el principio», Juan García-Gallardo introducía así, a modo de aviso, lo

que definió como «la supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten un destino y una utilidad para los ciudadanos». En el primer minuto y medio ante el micrófono, el dirigente de Vox repitió varias veces que iban a medias con el PP en esta ronda de recorte de partidas a los sindicatos y a la patronal, que por otro lado, cogía al presidente Alfonso Fernández Mañueco en Madrid, con la ministra Reyes

Maroto de anfitriona, en la firma del acuerdo de Siro.

El momento elegido por los dirigentes de Vox para activar el recorte de los apoyos presupuestarios a los agentes sociales no es fruto del azar. Bien puede encajar en una maniobra de contraprogramación y de impulso a la acción política e ideológica tras una semana aciaga, de contundentes críticas a la inacción de la Junta ante la crisis que ha es-

tado a punto de llevar a Cerealto Siro a la quiebra (las dos consejerías directamente concernidas, las que gestionan la política industrial y la agroalimentación son de Vox) y en la que García-Gallardo ha tenido que gestionar el cese fulminante de un gerente de EcyL, tras conocerse que su empresa impartía los talleres de igualdad en los colegios de Valladolid que el partido quería eliminar, al que les costó fi-

char varias semanas. La rueda de prensa se convocó en domingo y se situó por la tarde, a las 17:30 horas, porque por la mañana el vicepresidente inauguraba el centro de libro de la localidad burgalesa de Covarrubias. Allí alertó de los peligros que acechan al castellano, lengua que «como vemos en otras regiones de nuestro propio país, está siendo amenazada».

El recorte de las subvenciones a sindicatos de clase y que, en un dos por uno, incluye a las recibe la patronal CEOE lo activa el primer dirigente de Vox en España con responsabilidades de Gobierno tras el acuerdo con el PP en plena recta final de la campaña electoral andaluza. Y en vísperas de participar en un mitin en los campos de invernaderos de El Ejido almeriense, en el que el burgalés está anunciado con Santiago Abascal y Macarena Olona para hoy martes.

que ese dinero servirá para contratar más orientadores en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (EcyL) y para sufragar formación en empresas que garanticen al menos una contratación del 50% de los participantes, con lo que se logra, según explicó el consejero, una capacitación más adaptada a lo que requiere el mercado laboral.

Juan García-Gallardo recalcó que el tijeretazo a los agentes sociales es una decisión pactada «con todo el Gobierno, incluido el presidente Fernández Mañueco», y que con ella se reducen «partidas que era superfluas» y se suprimen «otras que eran inútiles». Recordó que atajar el «gasto superfluo» está en el pacto que firmaron PP y Vox.

El vicepresidente situó el acuerdo en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado jueves, aunque ese día no informó del mismo el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo. «No fue un acuerdo adoptado formalmente», precisó Gallardo, antes de insistir en que el recorte de las subvenciones a sindicatos y patronal si fue «concretado» esa mañana. Los intervinientes en la comunicación del anuncio adelantaron que no serán los únicos recortes. Habrá otros que «irán concretándose en sucesivos acuerdos de Gobierno», avanzaron.

Revisión en la etapa de Cs

La revisión de las partidas que los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CEOE reciben para cursos de formación no es algo nuevo. Ciudadanos inició en la pasada legislatura las gestiones para abordar una reforma en profundidad de los criterios por los que se reparten estos fondos, después de que una auditoría del Consejo de Cuentas pusiera serios reparos a que estas organizaciones recibirán subvenciones directas en lugar de concurrir en un mar-

El vicepresidente remarcó que la «paz social» no puede ser «a costa del apesobramiento» de los actores implicados

La parte de Vox del Gobierno adelantó que no serán los únicos recortes, que habrá otros que «irán concretándose»

co de competencia con otros formadores a ese dinero público. Pero el asunto no se circunscribía exclusivamente a los agentes sociales.

Existen varias sentencias judiciales contrarias al contenido de las bases con las que se reparten los fondos autonómicos, heredados de los gobiernos del Partido Popular en solitario, que concluyen que dan ventaja a determinados grupos empresariales del sector de la formación. Las medidas que va a adoptar la Junta de Castilla y León no entran en este terreno.

El actual consejero de Industria desarrolló en esa consejería, en la etapa de Ciudadanos, labores de coordinación como funcionario. Preguntado sobre si puso en alguna ocasión algún reparo al diseño de las subvenciones que ahora se suprimen o recortan, Veganzones justificó su perfil «técnico» y subrayó que se limitó a «ejecutar» las decisiones de los cargos políticos.

García-Gallardo habló de Siro, pero fue porque le preguntaron los periodistas. «A nosotros no nos gustaría polemizar sobre esta cuestión», respondió a una cuestión sobre las gestiones del Ministerio de Industria en la resolución de la crisis de Siro. «Re-

chazamos politizar cuestiones no politizables», insistió. ¿Felicita al Ministerio de Industria por su mediación?, le preguntó un informador. «Yo lo que celebro es que el empleo continúe y que se haya llegado a este acuerdo», aseguró.



Igea pasa junto a Mañueco durante una intervención de Tudanca en las Cortes. CARLOS ESPESO

La patronal y las centrales sindicales guardan silencio mientras la oposición lanza duras críticas

Tudanca e Igea coinciden en que Vox hace el anuncio «a la vez que Mañueco agradece a los sindicatos su gestión en la crisis de Siro»

ANTONIO CORBILLÓN

VALLADOLID. Tanto las dos grandes centrales sindicales, UGT y CCOO, como la patronal regional CECAL, que sufrirá el 'tijeretazo' en los planes públicos y subvenciones a su labor anunciados por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, prefirieron guardar silencio y no valorar esta decisión. Tan solo la portavoz de Ceca, Ángela de Miguel, aventuró en los primeros minutos de confusión y sorpresa inicial por esta decisión, que «el Diálogo Social es un concepto muy amplio y en esos planes hay mucha democracia participativa y no va específicamente de las ayudas a la patronal o los sindicatos». Desde una prudencia marcada por la sorpresa inicial ante la noticia, De Miguel insistió en que sindicatos y empresarios «solo tratan de participar en el diseño de políticas públicas que van mucho más allá (vi-

vienda, necesidades sociales...)» detalló.

Minutos después de estas primeras palabras, tanto la patronal regional como los sindicatos anunciaron, al parecer de común acuerdo, que no harían valoraciones hasta analizar esos 10 puntos que les recortan 20 millones de euros anunciados por García-Gallardo.

Quienes sí se pronunciaron y de forma muy crítica, fueron distintos representantes políticos de Castilla y León. El líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, recordó en su cuenta de Twitter que el anuncio se producía «a la misma hora en la que se firma el acuerdo que salva miles de empleos en Siro. Acuerdo en el que han sido claves los sindicatos e inútil la Junta. Suena a venganza. Es intolerable. Y Mañueco y el PP cómplices después de haber incrementado el número de asesores y altos cargos».

Los agentes sociales pactaron no hacer valoraciones hasta que analicen los argumentos de los recortes

El portavoz de Ciudadanos y predecesor de García-Gallardo en la vicepresidencia, Francisco Igea, colgó un vídeo de más de dos minutos en su perfil de Twitter en el que acusó al líder de Vox de «volver a meter su estupidez en campaña». Al igual que Tudanca, Igea recordó que esta decisión se produjo «a la misma hora en la que el presidente (Fernández Mañueco) tiene que ir a dar las gracias a los sindicatos por lo de Siro». Por último, Igea reclamó al presidente nacional del PP (Alberto Núñez Feijóo) que «tiene que actuar» para acabar con lo que calificó de «ópera bufa y charlotada». «Hay que cesar al vicepresidente de la Junta. Y, si hace falta, también al presidente».

«No les crean»

Resulta llamativa la opinión de la predecesora en el cargo de consejero de Industria y Empleo de Mariano Veganzones, Ana Carlota Amigo, que aseguró también en Twitter que «cuando tienes que anunciar algo antes de unas elecciones para que parezca que cumples con tu electorado. Ya avanzo que no es verdad que vayan a reducir el 50% de las ayudas. No les crean...».

Vox recorta 20 M€ en ayudas al Diálogo Social que irán a emergencias sociales

Los recortes afectan a varias subvenciones a CEOE, UGT, CCOO que «no aportan nada a la mejora de los ciudadanos» y García-Gallardo advierte: «Esto es solo el principio»

RICARDO GARCÍA VALLADOLID
«Recorte a las subvenciones que reciben los sindicatos y la patronal de Castilla y León, CEOE-Cecale, UGT y CCOO, y aquellas de las que son beneficiarias dentro del marco del Diálogo Social. Vox recorta más de 20 millones en ayudas a sindicatos y patronal y los destinará a emergencias sociales. «La emergencia social y económica obliga reducir partidas a sindicatos para destinar a actuaciones sociales», aseguró este lunes el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien señaló que esa reducción no será nunca inferior al 50% de la participación institucional de sindicatos y patronal.

Esta decisión se enmarca, según explicó el vicepresidente este lunes durante la rueda de prensa convocada para realizar este anuncio, en el punto del acuerdo de gobierno suscrito por Vox y PP que propone «la reducción del gasto institucional superfluo y el gasto público ineficaz». Así, se plantea una reducción no inferior al 50% en el gasto para participación institucional de los agentes económicos y sociales de la Comunidad, la supresión de algunas subvenciones específicas y la mejora de la eficiencia del gasto.

En total serán 20.362.000 euros los que la Junta se ahorrará con esta decisión para reinvertirlos en esas emergencias sociales, al tiempo que la reducción de estas ayudas comenzará aplicarse en el ámbito de actuación de Consejería de Industria, Empleo y Comercio, «pero que será extensible a las demás consejerías afectadas», puntualizó García-Gallardo, quien dejó claro que se se trata de «una aplicación del acuerdo de Gobierno PP-Vox».

Esta reducción de ayudas están recogidas en un plan de actuación de 10 medidas, entre las que se encuentran la rebaja al 50% de los más de 3,5 millones que reciben CEOE-Cecale, UGT y CCOO, la supresión de los 1,2 millones de euros en subvenciones que se entregan a los agentes sociales dentro del marco del Diálogo Social y la eliminación de las ayudas a programas de riesgos laborales, que asciende a 2,5 millones y que se distribuyen entre el resto de organizaciones sindicales, entre otras.

Por otro lado, otra de las partidas recortadas será la de las subvenciones destinadas a acciones de orientación profesional y para el autoempleo, que disminuirá



El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. Tras él, el consejero de Industria, Mariano Véganzones. ICAI

en 12 millones de euros y será la más cuantiosa de la lista expuesta por Vox este lunes. En este sentido, el consejero de Industria, Comercio y Empleo aseguró que «el ECyL ya cuenta con orientadores», al tiempo que «este programa solo tiene un 5% de compromiso de contratación».

En este sentido, Véganzones avanzó que esos importes se invertirán en cursos de formación diseñados por las propias empresas, a las que se exigirá un compromiso de contratación del 50% de aquellas personas que los superen y que «están siendo muy demandados».

Además, y en lo que respecta a esas subvenciones destinadas a la prevención de riesgos laborales, que según Véganzones se traducen en «visitas a las empresas», los cerca de dos millones y medio de ahorro se dirigirán a ampliar «recursos y personal de las oficinas de trabajo» de Castilla y León, ya que consideró que sus funciones son las mismas que realizan con estas partidas los sindicatos.

Asimismo, García-Gallardo avisaba ya ayer que «esto es sólo el principio, se abordarán otras partidas dentro de la Consejería de Empleo, Comercio e Industria y del resto de las consejerías».

Sobre si se trata de un acuerdo del Consejo de Gobierno, el número dos del Ejecutivo autonómico insistió en que estas medidas se enmarcan en el acuerdo PP-Vox y que se decidan en la reciente reunión de la comisión de

UN RECORTE DE MÁS DE 20 MILLONES

Participación institucional. Reducción del 50% hasta los 2 millones.

Subvenciones directas al Diálogo Social. Se suprimen 1,2 millones.

Prevención de riesgos laborales. Se suprimen 2,4 millones.

Subvenciones de promoción. Reducción del 50% hasta los 12.500 euros.

Cátedras sobre sindicalismo. Se suprimen 160.000 euros.

Orientación profesional. Se suprimen 12 millones.

Trabajadores ocupados. Se suprimen 800.000 euros.

Integración de inmigrantes. Se suprimen 925.000 euros.

Promoción y empleo. Se suprimen 300.000 euros.

Negociación colectiva. Se suprimen 964.000 euros.

seguimiento de este acuerdo. «No es un acuerdo formal y con la solemnidad del Consejo de Gobierno», apuntó el vicepresidente, que reconoció que estas medidas se concretaron «con ocasión de la celebración de la reunión» de Mañueco con todo su equipo. Al respecto, anunció que «irán teniendo sus propios acuerdos en sucesivos consejos de gobierno», explicó el vicepresidente de la Junta sobre el resto de áreas de gobierno.

Sobre este aspecto, García-Gallardo insistió en que esta decisión se ha pactado «con todo el Consejo de Gobierno», lo que incluye también al Partido Popular al ser su socio en el ejecutivo. «Han llegado a la convicción de que había que reducir y suprimir estos gastos», relató el vicepresidente, quien además confirmó que la reunión se produjo el pasado jueves. No obstante, la demora en el anuncio tiene que ver con el deseo de hacerlo «con medidas concretas».

«Entendemos que es una decisión del Gobierno y como tal la anunciamos en rueda de prensa», justificó por tanto el número dos del ejecutivo autonómico. Finalmente, y para dar por zanjado el tema, García-Gallardo confió en que «no se rompa el Diálogo Social» y remarcó una vez más que «no se trata de recortar por recortar. Es redistribuir el gasto público para que vaya a la emergencia económica y social de todos los castellanos y leoneses», argumentó.

ABASCAL ADVIERTE QUE EL RECORTE SE HARÁ TAMBIÉN EN ANDALUCÍA

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aplaudió ayer la decisión de la Junta de Castilla y León de recortar subvenciones a sindicatos y patronal y avanzó que se repetirá «donde Vox gobierne». «Hoy es Castilla y León. Mañana, Andalucía», sostuvo en un mensaje publicado en su perfil de la red social Twitter.

Abascal explicó que «el dinero que antes se regalaba a sindicatos y patronales se destinará a lo importante: escuelas, centros de salud, dependencia e infraestructuras»; y añadió que «el cambio real pasa por acabar con la fiesta de los poderosos». Otras caras conocidas del partido respaldaron las palabras de su jefe de filas en torno a la medida anunciada por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan García-Gallardo, y el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Véganzones. Uno de ellos fue Iván Espinosa de los Monteros, quien citó un tuit de García-Gallardo para expresar que «parece mentira, pero hay otra forma de hacer política, sin derrochar el dinero», informa Ical.

TUDANCA VE UNA «VENGANZA» POR EL ACUERDO FIRMADO EN SIRO

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, consideró ayer que la reducción de gasto «superfluo e ineficaz», por importe de 20,3 millones de euros, que hasta ahora se destinaba a organizaciones sindicales y empresariales anunciadas por el vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo suena a «venganza» por el acuerdo en Siro.

«A la misma hora en la que se firma el acuerdo que salva miles de empleos en Siro. Acuerdo en el que han sido claves los sindicatos e inútil la Junta. Suena a venganza. Es intolerable. Y Mañueco y el PP cómplices después de haber incrementado el número de asesores y altos cargos», ha señalado a través de su cuenta en Twitter de la que se hizo eco Europa Press.

En este sentido, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, asegura también en su cuenta de Twitter que esta medida viene derivada de lo «mal que le va la campaña» a la candidatura de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona y por eso utiliza al Ejecutivo autonómico para intentar «impulsarla».

Escrivá vinculará las cotizaciones de los autónomos a su IRPF

La reforma, prevista para este mes, eleva las bases y los ingresos de Seguridad Social

CÉSAR URRUTIA MADRID
La reforma que plantea el Ministerio de Seguridad Social a los trabajadores autónomos plantea, según la última propuesta, nuevos tramos de cotización y un sistema para calcular estas bases que tendrá como efecto elevar la recaudación del organismo al permitir que sean menos los trabajadores que cotizan por mínimos. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, ha centrado sus mensajes en torno a la reforma del siste-

ma de cotización del colectivo en los tramos más que en qué elementos configurarán esos tramos. La novedad es que los importes económicos que determinarán las bases de cotización y las cuotas mensuales definitivas estarán constituidos por los rendimientos que fijan las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). «De este modo, Seguridad Social podrá cruzar la declaración de ingresos de los trabajadores autónomos con los datos y los

criterios de Hacienda para hacer más ágil la localización de cada declaración de ingresos en un tramo», explican fuentes de la Agencia Tributaria.

La consecuencia es que si alrededor del 86% de los 3,4 millones de autónomos que están incluidos en el sistema cotizan por la base mínima, el nuevo Anteproyecto de Ley por la que establece un nuevo modelo de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos incluirá

en sus bases mayores ingresos que el sistema actual y les obligará a mayores abonos. «No podrán elegir en qué tramo cotizan, como sucede ahora, y los cotizantes por la base mínima podrían pasar a ser la mitad o el 40%», estiman las mismas fuentes.

El cambio que propone Escrivá se produce cuando los ingresos del sistema por cotizaciones están en máximos históricos y es parte de la reforma de las pensiones. Esta iniciati-

va es un mandato del Pacto de Toledo y un compromiso con la Comisión Europea para que los autónomos coticen por sus ingresos reales pero ninguno de los sistemas propuestos hasta ahora ha recogido el apoyo de los autónomos y es más que probable que la actual propuesta, que supone un fuerte aumento de las cotizaciones para buena parte del colectivo tampoco lo haga.

La propuesta de Escrivá indica que los importes económicos que determinarán las bases de cotización de los trabajadores autónomos y sus cuotas mensuales definitivas estarán constituidos por «los rendimientos del trabajo, del capital mobiliario y de actividades económicas obtenidos por cualquiera de los métodos y modalidades de determinación del rendimiento neto de las actividades».

En esta categoría se incluirían los ingresos que representa, por ejemplo, el alquiler de una licencia de taxi o de un espacio en un despacho de abogados. Aunque acciones, depósitos o bonos son bienes muebles la norma del IRPF no los considera «bienes afectos», por lo que, en principio, quedarían excluidos, según expertos fiscales.

El Ministerio de Seguridad Social debería presentar el próximo 30 de



El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ayer durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa. EFE

85

Base mínima. Ese porcentaje de los autónomos cotiza por la base mínima, que supone 960 euros.

junio ante la Comisión Europea una reforma del sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos pero lo hará con un plazo muy ajustado y, previsiblemente, sin acuerdo de los agentes sociales, con quienes ha estirado al máximo el tiempo de negociación sin que haya un acuerdo a la vista.

Seguridad Social trasladó el pasado sábado a las principales asociaciones de este colectivo sus propuestas para reformar el sistema de cotizaciones y prestaciones, de manera que coticen por sus ingresos reales, como plantea la reforma.

El último planteamiento establece varios tramos en función de esos rendimientos netos y rebaja la cuota mínima, así como los tramos intermedios para aumentarla en los más altos. Concretamente, la cuota mínima arrancaría en 245 euros mensuales hasta otra más elevada de 565 euros al mes. Para este último tramo, el cambio supone 15 euros más al mes mientras que para el inferior, supone una rebaja de cinco euros mensuales.

La propuesta llega tras un largo periodo de negociación en el que las tablas de cotizaciones y los plazos de aplicación han sufrido numerosas variaciones. A falta de lo que suceda esta semana, no ha servido para obtener el respaldo unánime a la reforma. La asociación ATA, la más numerosa del sector y ligada a CEOE, ya ha adelantado que ve muy difícil el acuerdo.

Escrivá rebaja a 245 euros la cuota mínima para los autónomos pero eleva la máxima a 565 euros

Mejora la propuesta para las rentas entre 1.700 y 2.330 euros y abre la puerta a iniciar 2023 con unas cotizaciones similares a las actuales

LUCÍA PALACIOS

MADRID. El Gobierno acelera la reforma del nuevo sistema de cotización de los autónomos cuando apenas quedan poco más de 15 días para que expire el plazo acordado con Bruselas para tenerlo diseñado. Así, para tratar de alcanzar un acuerdo que por el momento parece complicado, el Ministerio de Seguridad Social presentó ayer en la reunión que mantuvo con los agentes sociales y las principales asociaciones del colectivo una nueva propuesta de cuotas que rebaja ligeramente la mínima, eleva 15 euros la máxima y mejora las cotizaciones para las rentas medias.

De llevarse finalmente a cabo, las cuotas para los próximos tres años oscilarían entre los 245 euros al mes para los que tienen ingresos hasta los 670 euros y los 565 euros para quienes ganan más de 4.050 euros, frente al anterior planteamiento que iba de 250 euros a 550 euros, según avanzó a este periódico el presidente de UPTA, Eduardo Abad. Además, se suaviza la cotización para aquellos autónomos con una facturación de entre 1.700 y 2.330 euros mensuales y se amplían de 13 a 14 los tramos.

Así, el Ejecutivo propone que los autónomos con rendimientos netos de entre 1.700 y 1.850 euros mensuales paguen una cuota de 370 euros, 30 euros menos de lo que señalaba su propuesta anterior. A su vez, quienes ingresen entre 1.850 y 2.030 euros abonarán 400 euros al mes, 40 euros menos; y quienes obtengan entre 2.030 y 2.330 euros tendrán una cuota de 440 euros. El resto de tramos no tienen cambios.

Escrivá busca atraer el sí de la patronal pero, por el momento, sin éxito. ATA, la organización de autónomos mayoritaria integrada dentro de la CEOE, ya ha advertido que este nuevo planteamiento sigue siendo «inasumible», ya que supone para un autónomo que gana 1.700 euros al mes tener que pagar 900 euros de cotización más al año, un 26% más, según denunció su presidente, Lorenzo Amor. El líder de UPTA, por su parte, da la propuesta por «buena» y urge al Gobierno a «tomar ya decisiones» ante el bloqueo de la patronal.

Además, el Ejecutivo por fin ha dado forma a la propuesta que hasta ahora había ido desgranando



El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, participó ayer en un desayuno informativo. MARISCAL / EFE

verbalmente en la mesa del diálogo social y ha redactado ya el anteproyecto de ley por el que se establece el nuevo modelo de cotización, que envió el pasado sábado por la mañana a los interlocutores sociales. Se trata de 74 páginas en las que deja clara la «obligación» de los más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia de cotizar a la Seguridad Social «en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades

económicas o profesionales», aunque se les aplicará una deducción por gastos genéricos del 7%, según consta en el texto al que ha tenido acceso este periódico.

Para ello los autónomos deberán elegir la base de cotización mensual que corresponda en función de su previsión de rendimientos netos anuales. Lo harán dentro de una escala de bases fijadas en la Ley de Presupuestos y limitadas por una base mínima y una base máxima para cada año.

RENDIMIENTOS NETOS

3,3

millones de autónomos estarán obligados a partir de enero a cotizar en función de sus rendimientos netos. No obstante, se les aplicará una deducción por gastos genéricos del 7% y podrán cambiar de base hasta seis veces al año.

En cualquier caso, para garantizar una aplicación suave el anteproyecto recoge que durante el año 2023 «los trabajadores autónomos cotizarán por la base de cotización que más se aproxime, por exceso o por defecto, a aquella por la que viniesen cotizando en diciembre de 2022». Es decir, que el Ejecutivo abre la mano a no aplicar plenamente el nuevo sistema en enero, sino que el año que viene, año electoral, las cotizaciones de este colectivo sean similares a las actuales.

Nuevo incremento en 2026

Lo que sí destaca la norma es que el objetivo final del Gobierno es incrementar progresivamente la base mínima de los autónomos en 2023, 2024 y 2025, a fin de equipararse a la base mínima del Régimen General el 1 de enero de 2026. Ello supondrá otra vuelta de tuerca, ya que todavía existe una brecha entre ambos regímenes: mientras la base mínima de los asalariados se sitúa en los 1.166,7 euros, la de los autónomos está en 966 euros.

El texto incluye además que los autónomos podrán cambiar hasta seis veces al año de base para acercarse lo más posible a sus rendimientos netos. En cualquier caso, una vez finalizado el ejercicio, el sistema incluye una corrección automática de forma que si ha pagado de más el sistema le devolverá de oficio lo sobrecotizado, mientras que si ha pagado menos de lo que ha ganado deberá ingresar la diferencia.

Asimismo, el proyecto del Gobierno recoge las cuatro modalidades de «paro» que habrá para los autónomos y que adelantó la semana pasada este periódico.

El Gobierno se reafirma en que subirá las pensiones con el IPC «como el resto de Europa»

L. PALACIOS

MADRID. El Gobierno no quiere ni oír hablar de una subida de las pensiones que no sea acorde con el IPC, sea cual sea la inflación media al final de año. Así está garantizado por ley en la reforma recién aprobada y no hay intención alguna de dar marcha atrás, pese a la oposición que han mostrado a esta decisión organismos de la talla del Banco de España, la Comisión Europea o la OCDE ante la previsión de que pueda significar un alza de entre el 7% e incluso un 8%.

«Obviamente se puede mantener la revalorización con el IPC.

Toda esta discusión es tan sagrada, tan poco rigurosa, que no deja de sorprenderme», sostuvo ayer el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante su intervención en un foro de Nueva Economía Fórum. El titular del ramo hizo hincapié en que este «debate artificial» que se ha instalado en una parte de la sociedad española no se da en «el resto de Europa».

Así, defendió que todos los países europeos del entorno español están revalorizando las prestaciones con el IPC. Puso de ejemplo a Alemania, donde las pensiones se han incrementado entre un 5% y un 6%; a Francia,

que va a adelantar unos meses la subida de las prestaciones con un 4% adicional; y a Italia, que también va a hacer un «añadido». Por ello, instó a reflexionar por qué con una «inflación similar» en España se está realizando este «debate muy singular».

Sostenibilidad del sistema

En este sentido, el ministro no se mostró preocupado por la sostenibilidad del sistema ante el fuerte desembolso que tendrá que hacer la Seguridad Social para pagar el año que viene esta nueva subida, que supondrá más de 10.000 millones de euros extra. Para ello se apoyó en los bue-

nos datos de recaudación que se están logrando en este ejercicio. Así, destacó que los ingresos por las cotizaciones de los trabajadores están creciendo más deprisa que los gastos: un 9% frente a un 6%. A su vez presumió de que el déficit de la Seguridad Social se ha reducido a la mitad, puesto que ha pasado de suponer el 1,7% del PIB en 2018 al 0,9% en 2021; este año además se prevé cerrarlo en el 0,5%.

Por otra parte, Escrivá anunció que en las «próximas semanas» aprobarán dos medidas para completar el Ingreso Mínimo Vital. Una es el sello social, que facilitará la colaboración con empresas para favorecer la inclusión de los beneficiarios, y la otra es el incentivo al empleo, que impulsará a los perceptores de la prestación para incorporarse al mercado laboral.

El dato

210

euros/MWh cuesta hoy la electricidad mayorista

El precio de la electricidad en el mercado mayorista subirá hoy por encima de los 210 euros/MWh, a espera de la aplicación a partir de mañana de la excepción ibérica para topa el precio del gas para generación de electricidad.

142%
más cara la luz que hace justo un año



La empresa



OHLA, a través de su filial estadounidense Judlau, ha conseguido un nuevo contrato en el metro de Nueva York por valor de 88,4 millones de euros, que incluye los servicios de pintura y reparación de varias estructuras.

La balanza



Los concursos de acreedores avanzaron en mayo hasta los 521, con un incremento del 5,3% sobre el mismo periodo del año anterior, con una fuerte influencia de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que sumaron en conjunto seis de cada diez concursos en España.



El neobanco MyInvestor ofrecerá a los clientes que hayan contratado una hipoteca probar su servicio de roboadvisor sin comisión durante el primer año. Busca animar a invertir a largo plazo para evitar que la inflación merme su poder adquisitivo.

► **Calviño reconoce que el descuento de 20 céntimos se ha diluido por la subida sin freno de los carburantes. El diésel está ya a 2,01 euros. Hacienda aún debe dar el sí**

El Gobierno estudia aumentar la ayuda en 10 céntimos por litro

J. de Antonio. MADRID

Dos meses y medio después de que el Gobierno aprobara la bonificación de 20 céntimos al combustible, automovilistas y profesionales han visto desaparecer su efecto y ya pagan más por llenar el depósito que antes de esta ayuda. El litro de gasolina ha superado por primera vez la barrera de los dos euros y la previsión es que siga subiendo por la situación geopolítica, que continúa complicada por la guerra de Ucrania. Además, los combustibles se elevan ya en España por encima del precio medio de la Unión Europea y superan a economías con mayor poder adquisitivo como Alemania, Francia e Italia.

Según datos oficiales del Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica, el litro de diésel supera ya los dos euros. En concreto, el precio medio del gasóleo en las estaciones de servicio de todo el territorio nacional está a 2,01 euros. Además, supera la marca mínima de los dos euros en el 69% de las 11.413 gasolineras abiertas de España. En el caso del

Díaz insiste en más impuestos a las eléctricas

► **Bonificaciones «discriminadas» por capacidad económica, ayudas directas al transporte público y un nuevo «impuesto extraordinario» sobre los beneficios de las compañías eléctricas para paliar el impacto de la guerra de Ucrania sobre los precios de la energía. Estas son las nuevas propuestas que lanzó ayer Yolanda Díaz, que confirmó que ya se están negociando ya entre los dos socios de Gobierno. Esta negociación incluye la incorporación de un impuesto extraordinario a las eléctricas para compensar a los ciudadanos por el alza de los precios y sobre sus beneficios, y recordó que este tipo de impuesto ya se está aplicando en muchos países europeos.**

litro de gasolina 95, la situación es aún peor, ya que está a 2,11 euros de media y supera los 1,999 en el 90% de las estaciones.

Ante esta situación, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ya maneja la posibilidad de implementar más medidas para moderar la escalada de precios de la energía y, entre ellas, no descarta que se aumente el importe de la actual bonificación por litro de los carburantes y que se prorrogue más allá del 30 de junio. Aprovechó una visita a Barcelona para anunciar que ya «estamos analizando si hay que hacer nuevas modificaciones o cambios» en el paquete de medidas anticrisis que se prorrogará en breve «para garantizar que esas medidas sean lo más eficaces posibles» para ayudar al consumidor y entre ellas el Ministerio está barajando la ampliación de la cuantía de la bonificación, ya que la subvención de 20 céntimos ha desaparecido al incrementarse el precio en 23 céntimos. Fuentes gubernamentales explicaron a LA RAZÓN que la cuantía está aún por determinar, pero que podría estar determinada por una horquilla de entre 5 y 10 céntimos por litro, «aunque no se descarta que sea más elevada si



la situación empeora». Pero las mismas fuentes inciden en que la última palabra «la tiene Hacienda» y que «no habrá aumento si las cuentas no le cuadran».

La ministra achacó el aumento del precio de los carburantes a su despegue en los mercados internacionales. Pese a ello, ha lanzado una nueva advertencia al recordar que la Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia «está vigilando muy de cerca» la presencia de malas prácticas en las gasolineras. Precisamente por esta razón, la propia Calviño amenazó con retirar el descuento e imponer fuertes multas y sanciones –que podrían incluir incluso la retirada de las licencias de comercialización– para aquellos que hubieran inflado los precios. Incluso llegó a barajar no prorrogar esta ayuda más allá del 30 de junio, algo que ya se da por hecho ante la escalada imparable de los carburantes, que no parece tener techo.

La que no parece muy partidaria de esta medida es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo que puede abrir un nuevo frente de discor-

Yolanda Díaz carga contra la bonificación generalizada y reclama ayudas al transporte público

pressreader PHOTOS AND DISTRIBUTION BY PRESSREADER
Prensa.es/razaon.com 21 804 278 6000
COPYRIGHT NOT PROTECTED BY APPLICABLE LAW

Opinión

Los tipos de interés se disparan

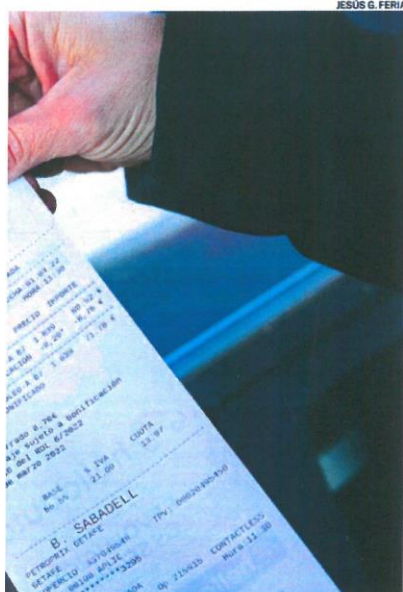
Juan Ramón Rallo

Los tipos de interés de la deuda pública española y de la deuda pública italiana están entrando en zona de peligro. Ayer el coste de financiación del bono italiano superó el 4% y el del bono español roza el 3%. En parte,

se trata de un fenómeno generalizado no sólo de la Eurozona, sino también de Estados Unidos: al otro lado del Atlántico, los tipos de interés ya alcanzan el 3,3%. Pero en parte también se trata de un incremento de nuestra prima de riesgo, que en pocos meses ha pasado de ser casi inexistente a acercarse a los 150 puntos básicos. Y ni lo uno ni lo otro es fácil que remita a corto plazo. Por un lado, los tipos de interés están aumen-

tando en términos generales porque la inflación obliga a los bancos centrales a volver más restrictiva su política monetaria: de momento, la Reserva Federal está adoptando un tono más contractivo que el Banco Central Europeo, pero es inevitable que más pronto que tarde el BCE también endurezca su lenguaje. Por otro, las primas de riesgo de países como España e Italia están aumentando porque su elevado endeudamiento público vuelve su situación financiera muy vulnerable ante los incrementos de tipos: cuanto más incrementen los tipos de interés los bancos centrales, mayor será el riesgo de una crisis de deuda soberana entre aquellos países con mayor stock de

pasivos emitidos. Se trata de un escenario de pesadilla para los bancos centrales –especialmente para el Banco Central Europeo– del que hay difícil escapatoria: si no se suben los tipos de interés, la inflación se disparará; y si se suben los tipos de interés, las finanzas de los gobiernos menos solventes corren peligro. Un callejón de difícil en el que nos han metido a todos los propios gobiernos (y no me refiero sólo al gobierno de España). ¿Recuerdan cuando nos dijeron que el Estado había demostrado durante la pandemia que podía intervenir duramente en la economía sin que se rompiera nada? Pues bien, ahora empiezan a romperse las cosas.



JESÚS G. FERIA

Desde que se aplica el descuento de 20 céntimos la gasolina ha subido ya 23

día entre los socios de Gobierno. Díaz volvió a mostrar su disconformidad con que esta bonificación al combustible sea de tipo general y no vaya dirigida «a los que más lo necesitan». Por ello, apostó por «discriminar» a quienes reciben esta ayuda para no fomentar el uso de los hidrocarburos e insistió en lo «incomprensible» que resulta bonificar la gasolina o el diésel y no hacer lo mismo con el transporte de Cercanías o de Metro. «Al que hay que ayudar es al transporte público», insistió. Aunque no quiso facilitar detalles sobre la posible cuantía de esas reducciones de precios en los abonos de transporte público, se habría planteado una reducción de 10 euros.

Escrivá no convence a los autónomos del alza de cuotas

► La última oferta de la Seguridad Social apenas supone 30 euros de rebaja para los ingresos medios

J. de Antonio. MADRID

A José Luis Escrivá se le acaba el tiempo y ya pone fecha para el final. El Gobierno ha presentado la que parece será la penúltima propuesta para el cambio de sistema de cotizaciones de autónomos por ingresos reales –que estará vigente entre 2023 y 2025–. Las modificaciones finales por parte de las asociaciones deben llegar esta misma semana, ya que el próximo viernes el Ministerio de Seguridad Social quiere tener cerrado un acuerdo definitivo, según ha confirmado Eduardo Abad, presidente de UPTA. Pero no parece que esta propuesta final vaya a tener un consenso unánime, ya que la principal organización de este colectivo, ATA, ya ha manifestado que sigue considerando el plan de Escrivá «inasumible».

Lorenzo Amor, presidente de esta asociación, volvió a ser muy claro al final de la reunión. «Un autónomo que gana 1.700 euros al mes va a tener que pagar 900 euros más de cotización al año, un 26% más. No vamos a validar que a un autónomo le quiten 900 euros del dinero que lleva a su casa». También le recordó al Ministerio que a ese desembolso hay que sumar el precio de la luz, la energía o los costes laborales. «Los autónomos



EFE

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ayer

están para que los gobiernos les quiten costes, no para que se les añadan y para que les pongan zancadillas con los nuevos tramos.

Según la última propuesta ministerial, aquellos trabajadores que tengan ingresos por debajo de 670 euros pagarán una cuota de 245 euros, 15 euros menos que en la propuesta anterior, mientras que los que superen los 4.050 euros mensuales tendrán una cuota de 565 euros, lo que supone un incremento de 15 euros más respecto al último documento. En cuanto a los rendimientos netos que van desde los 1.700 euros a los

2.300 euros mensuales, el Ministerio ha presentado tres tramos: los autónomos con rendimientos netos de entre 1.700 y 1.850 euros mensuales deberán pagar una cuota de 370 euros mensuales, 30 euros menos de los que planteó en su propuesta anterior para el tramo de ingresos de 1.700 a 1.900 euros; el tramo comprendido entre los 1.900 y los 2.330 euros se divide en dos, con unos ingresos de 1.850 a 2.030 euros se propone una cuota de 400 euros, y con ingresos de 2.030 a 2.330 euros, la cuota sería de 440 euros.

Abad lanzó un aviso de navegantes implícito a su homólogo de ATA. «Creo que ya es momento de tomar decisiones. Sería ideal que este sistema nazca con el acuerdo del 100% de las partes implicadas, pero si no es así, el Gobierno tiene que tomar ya decisiones». Para ATA, aún hay «tiempo» y «margen» para la negociación.

ATA, la asociación mayoritaria, rechaza el nuevo sistema de cotizaciones «por inasumible»

Editorial

Electoralismo inútil con las gasolinas

Parece evidente que la política de subvencionar la demanda de los combustibles, en lugar de impulsar la oferta, no está consiguiendo los objetivos previstos. Es más, el precio del diésel y la gasolina no ha dejado de subir, hasta el punto de que en nuestro país llenar el depósito de automóviles y camiones es ya más caro que en Alemania o Francia, por poner dos ejemplos de economías con salarios medios más altos. La realidad, es que la dinámica del mercado de los combustibles, como era evidente, ha absorbido la bonificación estatal de 20 céntimos por litro, con un coste, además, para la Hacienda pública calculado en 1.423 millones de euros, que, por supuesto, suponen un incremento del déficit fiscal que habrá que cubrir vía impuestos. Pero el Gobierno, azuzado por la presión de la opinión pública y por una inflación galopante, que no deja de crecer, optó por la bonificación directa, en lugar de operar sobre el IVA y los impuestos especiales a los hidrocarburos, que suponen más de la mitad del precio por litro de los combustibles de automoción que paga el consumidor. Ahora bien, y pese a la tozudez de los hechos, la ministra de Economía y vicepresidente primera del Gobierno, Nadia Calviño, planteó ayer la posibilidad de seguir insistiendo en las mismas políticas, no sólo prorrogando el periodo de bonificaciones más allá del mes de junio, sino incrementando el importe de las ayudas hasta 30 céntimos por

litro. La cuestión no sería grave si, en realidad, nos halláramos ante una clásica táctica electoralista, dadas unas encuestas andaluzas con muy malos pronósticos para los dos partidos que conforman el Ejecutivo, pero la reacción de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteando que el esfuerzo fiscal resultante se aplique sobre el transporte público o, al menos, que la subvención no sea de tipo general sino por renta –hace temer que se seguirá insistiendo en el error. Con un problema añadido, que, según todos los indicios, los precios en el mercado internacional de hidrocarburos van a seguir al alza –se habla, para España, de un coste de 3 euros por litro de gasolina para los próximos meses–, en parte por los recortes de producción de la OPEP y las sanciones a Rusia, pero, también, por la caída de la capacidad de refino mundial causada por la pandemia. Un proceso industrial, el del refinado del crudo, que exige grandes consumos de gas y otras energías, también por las nubes. Entendemos la resistencia del Gobierno, que está recogiendo el maná del IVA que genera la inflación, a actuar en la única vía lógica, la reducción de las cargas fiscales que sufren los ciudadanos, pero se corre el riesgo de que, al final, se produzca un parón mayor en la recuperación de la economía española, dando al traste con las previsiones de ingresos del Estado. Como ocurre en el ámbito del alquiler de viviendas, hay que impulsar la oferta, no subvencionar la demanda.

Dintazac